

AUSTERIDAD Y PRECIOS AGRICOLAS

EL comentario a las declaraciones programáticas del ministro de Agricultura, publicado en INFORMACIONES del 29 de julio, ha suscitado reacciones contradictorias. Han dicho algunos que el artículo era certero. Y otros que le faltaba mesura y le sobraba un punto de acritud. Argumentaré en defensa propia que aquel artículo criticaba unas declaraciones programáticas, en mi opinión desambientadas, con base en dos ideas fundamentales.

Una, que pretender aumentar el nivel de vida del agricultor haciendo que se dedique a otra cosa, no es hacer agricultura. Es, o puede ser, hacer política de desarrollo en el medio rural, pero no hacer agricultura. He aquí uno de los puntos flacos de las declaraciones. Tomo literalmente del «Ya» del 16 de julio la versión que este periódico ofrecía de las palabras del ministro: «Las rentas procedentes del sector agrario, por sí solas, son insuficientes para conseguir una sustancial mejora del nivel de vida rural.» Palabras que me parecieron preocupantes, y que hoy me siguen preocupando. La comercialización y la industrialización de los productos agrarios deben hacerse con participación de los agricultores. Pero no se debe descargar en estas funciones secundarias la elevación de las rentas del agricultor. El agricultor debe sobrevivir sin necesidad de ese pluriempleo. Debe ganarse la vida decorosamente mediante su ocupación propia que es producir productos agrícolas. Si en mi comentario hubo acritud, ofrezco excusas. Lo cierto es que mi reacción fue de alarma y los motivos para esta alarma creo que continúan.

El otro punto que critiqué era la concepción tecnocrática de la empresa agraria que se traslucía en las declaraciones del ministro. Tomo igualmente del «Ya» las palabras que, en mi modo de pensar, constituyen una visión desviada del tema: «Para el país, el problema no es la dimensión, sino la rentabilidad y productividad de la tierra. La gran empresa agraria es como la gran empresa industrial, comercial, etc.»

Vamos a ver. La gran empresa agri-

Por Félix PASTOR RIDRUEJO

cola no es como la gran empresa industrial o comercial. Precisamente, en sus efectos sociales, es algo muy diferente. La dimensión de las explotaciones no sólo es un problema económico, sino también un problema social. Y lo más grave, lo más delicado del problema agrario es que la eficiencia técnica puede estar, al menos en la concepción del mundo en que estamos inmersos, en contradicción con la calidad social de las estructuras agrarias de producción. Lo cual no quita que la calidad social de unas estructuras se deba considerar antes que ninguna otra circunstancia. Para poner un ejemplo, las estructuras de propiedad de los regadíos del valle del Ebro no son las mismas que las del valle del Guadalquivir. No tienen el mismo valor social. Y creo que la política agraria no puede ser indiferente ante estas diferencias y limitarse a puros juicios de eficiencia técnica.

Sirva como mayor claridad otro ejemplo. En nuestra patria hay zonas de gran riqueza agrícola donde el paro, precisamente el paro agrícola, es una epidemia maligna. Sería excesivamente inocente, a la vez que malvado, acusar pura y simplemente a los empresarios agrícolas de tal situación. Pero está claro también que algo hay ahí que debemos mejorar, que debemos cambiar. Y este cambio, esta mejora, será, si se hace, reforma agraria.

Cómo mejorar las estructuras sociales del campo sin dañar su eficiencia técnica y sin provocar la huida de los empresarios es el gran problema de la reforma agraria. Pero precisamente por los riesgos de una reforma mal hecha es por lo que hay que plantearse, «desde ya», una mejora de las estructuras de la propiedad agraria, tan prudente y racional en sus planteamientos como en sus etapas. Parece ser que todo esto no lo supe decir demasiado bien en mi anterior artículo. Valga el presente como aclaración.

Y pasemos a otra cosa. En todo momento, pero especialmente en el

presente, hacer política agrícola es hacer política de precios. Los precios del campo son precisamente el arbitraje político de las tensiones campo-ciudad, o, si se prefiere, del conflicto de intereses entre productores y consumidores de productos agrarios.

Este arbitraje político sobre los precios agrícolas, hoy por hoy, es inevitable. El ministro de Agricultura que ejerza este arbitraje de modo favorable será un buen ministro desde el punto de vista de los agricultores. Si lo ejerce en su perjuicio, será pésimo, haga lo que haga en los demás campos de su competencia.

Esta advertencia es especialmente importante en el presente momento de la vida española. Nos hallamos de cara a una economía de austeridad. La gente del campo sabe muy bien quién ha pagado hasta el momento el precio de esta receta, de esta amarga medicina. La situación de los agricultores es muy delicada de cara a la coyuntura nacional de austeridad. Esta acabará por repercutir siempre sobre los que demuestren menos capacidad de reacción ante la presión. Hasta ahora, siempre que la austeridad se ha producido, el peso ha caído de modo aplastante sobre los agricultores. Pero éstos nunca han sido insensibles, aunque no siempre han demostrado capacidad de respuesta. Ahora unen a su sensibilidad a los estímulos negativos, una gran capacidad de rechazo.

El agricultor tiene conciencia de lo que va a suceder. Sus precios van a ser contenidos duramente, sin que sus costos, a pesar de las recientes promesas, se mantengan quietos ni mucho menos. Abonos, combustibles, maquinarias, proteínas, piensos, han sufrido ya el duro impacto de la devaluación. Pronto repercutirán en los bolsillos del campo. Si el agricultor no consigue repercutir la subida de costos, no sabemos cómo podrá defender su precaria economía. En todo caso, es malo crear ilusiones, o tratar de resolver los problemas mediante palabras. No se puede decir que la intervención cuidadosa en la política de precios no sea oportuna. Es más oportuna, más necesaria y más inevitable que nunca.